

**JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

PROCESO EJECUTIVO 2018-00113

Bogotá D.C., **10 AGO 2018**

Ingresa el presente proceso interpuesto por la señora JULIA GONZALEZ ROMERO, en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL - UGPP, con recurso de reposición presentado por el apoderado de la entidad ejecutada el 3 de julio de 2018 (fls. 80 al 83), contra el auto que libra mandamiento ejecutivo de pago.

I. DEL RECURSO PRESENTADO:

El apoderado judicial de la entidad ejecutada mediante escrito del 3 de julio de 2018 (fls. 80 al 83), presenta recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento ejecutivo de pago, en los siguientes términos:

Excepción de **CADUCIDAD**: para efectos de probar y sustentar dicha excepción trae a colación la sentencia del Consejo de Estado 25000-23-42-000-201306595 del Doctor William Hernández, concluyendo que el artículo 136 del C.C.A., establece que la acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta Jurisdicción, caducará al cabo de 5 años contados a partir de la exigibilidad del derecho.

Que en virtud a lo anterior, se observa que el título ejecutivo cobró ejecutoria el 30 de octubre de 2008 y, que solo hasta el 23 de marzo de 2018 fue presentada la demanda por parte del actor, esto al haber transcurrido 9 años, cuatro meses y 23 días, sin que sea dable aceptar la tesis según la cual, el término de caducidad se interrumpió durante el proceso liquidatorio de CAJANAL, es decir entre el 12 de junio de 2009 y el 12 de agosto de 2013.

De la misma forma, se presenta la excepción de **cobro de lo no debido**:

855 DIA 01

manifestando que en virtud al proceso liquidatorio, las solicitudes de reconocimientos de prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011, estarían a cargo única y exclusivamente de CAJANAL, mientras que las solicitudes radicadas con posterioridad a dicha fecha, se encuentran a cargo de la UGPP.

Que en virtud a lo anterior, la entidad encargada de dar respuesta a las reclamaciones de la parte actora, es CAJANAL, quien dio cumplimiento a la sentencia a través de la Resolución Nª PAP007993 del 5 de agosto de 2010 y efectuó el pago total de la condena, situación aceptada por la parte actora.

Al respecto trae a colación el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado de fecha 2 de octubre de 2014, dentro del radicado 11001030600020140002000, concluyendo que si el cumplimiento del fallo lo hizo en su integridad CAJANAL, dicha entidad es la responsable de realizar el pago de los intereses causados, en virtud de dicha condena.

II. TRAMITE.

La Secretaría del Despacho fijó en lista el recurso por un día (fol. 84) y corrió el traslado a la parte demandada por tres días, sin pronunciamiento alguno.

III. CONSIDERACIONES.

El recurso de reposición presentado por la entidad ejecutada gira en torno al mandamiento de pago librado por este Despacho el 13 de abril de 2018, así el Despacho entrará a pronunciarse sobre los puntos en que el recurrente presenta inconformidad:

En primer término aduce el apoderado judicial de la UGPP que la encargada del pago de intereses moratorios es CAJANAL y no la entidad demandada, en este caso la UGPP: para este efecto basta indicar que las apreciaciones hechas en el recurso se desvanecen con la Ley 1157 de 2007,

que en su artículo 156 creó la Unidad Ejecutada y, donde se dispuso lo siguiente:

“Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 1193 de 2012. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo:

- i) *El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003;”*
(Negrillas y subrayas fuera de texto)

A su turno el Decreto 169 de 2008 indicó:

“Artículo 1°. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en concordancia con el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 de 2007, tendrá las siguientes funciones:

- A. *En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas*
 1. *El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las administradoras exclusivas de servidores públicos del Régimen de Prima Media con Prestación Definida del orden nacional, causados hasta su cesación de actividades como administradoras; así como el de aquellos servidores públicos que hayan cumplido el tiempo de servicio requerido por la ley para acceder a su reconocimiento y se hubieren retirado o desafiliado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin cumplir el requisito de edad señalado, con anterioridad a su cesación de actividades como administradoras. De igual manera, le corresponderá la administración de los derechos y prestaciones que reconocieron las mencionadas administradoras y los que reconozca la Unidad en virtud de este numeral.*
 2. *El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo*

de las entidades públicas del orden nacional que se encuentren en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral.”

Por su parte, el Decreto 4107 de 2011 estableció:

“Artículo 64. Continuidad de actividades de Cajanal EICE en liquidación. Cajanal EICE en liquidación continuará realizando las actividades de que trata el artículo 3° del Decreto 2196 de 2009 hasta tanto estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, a más tardar el 1° de diciembre de 2012. Para garantizar la continuidad de los procesos que le deben ser transferidos de acuerdo con lo previsto en el artículo 1° del Decreto 2040 de 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, efectuará especial seguimiento a los contratos de administración u operación suscritos o que suscriba Cajanal EICE para desarrollar las actividades del artículo 3° del Decreto 2196 de 2009.” (Negrillas y Subrayas fuera de texto)

Así las cosas y, de acuerdo a la normatividad transcrita, es a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a quien le corresponde el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas causadas a cargo de administradoras del régimen de Prima Media con Prestación Definida respecto a las cuales se haya decretado su liquidación.

Ahora bien, el proceso de liquidación de CAJANAL EICE iniciado a través del Decreto 2196 de 2009, culminó el pasado 11 de junio de 2013, fecha límite establecida en la última prórroga otorgada a dicho proceso por medio del Decreto 877 de 2013, luego a partir del **12 de junio de 2013** la misma desapareció de la vida jurídica habiendo sido sustituida en virtud de la normatividad reseñada, por la Unidad ejecutada.

En cuanto a la resolución del Conflicto de Competencias Administrativas dirimido por el Consejo de Estado en providencia de data 02 de octubre del año 2014, una vez analizado el mismo, el despacho estima que se trata de

supuestos de hecho diferentes en tanto en el caso puesto en conocimiento de la Alta Corporación, el reconocimiento de la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2011, fue asumido por la UGPP, quien no obstante, se negó al pago de los intereses moratorios. En el caso que nos ocupa, el reconocimiento fue hecho por Cajanal EICE en liquidación, quien realizó el reconocimiento de lo que creyó deber, omitiendo el pago de los intereses moratorios los cuales se encontraban debidamente causados.

Ahora bien, si como lo dice el Consejo de Estado en el pronunciamiento anterior, el pago ordenado en la sentencia no se puede escindir, menester es concluir que tanto el reconocimiento de la reliquidación – función misional – como el pago de intereses moratorios, costas y demás, corresponden a una misma entidad, y en dicho sentido, habiendo desaparecido de la vida jurídica quien podía responder por el pago, **quien debe responder ahora no es otra que la entidad que la ha sustituido en la función misional.**

Y es que para el despacho el pago de la reliquidación ordenada así como de los intereses moratorios, la indexación y demás, forman parte de las actividades misionales tanto de la extinta Cajanal como de su ahora sustituta UGPP y su reconocimiento sigue la suerte de lo principal tal y como lo afirmó el Consejo de Estado en el concepto que es traído a colación.

Frente a la excepción de CADUCIDAD, basta señalar que el artículo 2536 del Código Civil, modificado por la Ley 791 de 2002, en su artículo 8, establece que la prescripción de la acción ejecutiva se produce 5 años después de su exigibilidad.

Al respecto se observa que la sentencia fue proferida por este Despacho el 17 de octubre de 2008 (fls. 12 al 23) y, conforme a la constancia de notificación y ejecutoria de la sentencia que obra a folio 11., la ejecutoria de dicha providencia ocurrió el 30 de octubre de 2008.

Especificado lo anterior y, como quiera que la pretensión de la presente acción es de naturaleza ejecutoria, se tiene que el Código Contencioso Administrativo dispuso en su artículo 177 que las condenas impuestas a las

entidades públicas serían ejecutables a partir de los 18 meses después en que adquirieron su firmeza:

“Efectividad de condenas contra entidades públicas

Art. 177.-

(...)

Sera causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para el cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria. (...)

En estos términos, la ejecutoria de la sentencia ocurrió el 30 de octubre de 2008 (fol. 11.), a partir de dicha fecha deben empezarse a contar los 18 meses establecidos en el artículo 177 del C.C.A. (Norma vigente al momento de proferirse la sentencia base de ejecución), es decir la exigibilidad del respectivo derecho se cumplió el 30 de octubre de 2010.

No obstante lo anterior, el Honorable Consejo de Estado, máxima autoridad de lo Contencioso Administrativo en varias oportunidades entre ellas en pronunciamiento efectuado dentro del expediente con radicado interno 5042-2015 de fecha 29 de marzo de 2016, M.P. Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ; radicado interno 1777-2015 del 25 de agosto de 2015, M.P. Dr. JOSE OCTAVIO RAMIREZ; y radicado interno 3637-2014 del 30 de junio de 2016, M.P. Dr. WILLIAM HERNANDEZ GÓMEZ, ha considerado que en “Virtud del Decreto 2196 de 2009 y la Ley 550 de 1999, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la entidad liquidada **fueron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta su conclusión, que tuvo lugar el 11 de junio de 2013**, esto es, por el espacio de cuatro (4) años”, criterio que debe ser acogido por este Despacho Judicial.

Al verificar la fecha de ejecutoria de la sentencia, el término de radicación de la demanda -23 de mayo de 2018 y, la suspensión de términos entre el 12 de junio de 2009, hasta el 11 de junio de 2013, como fue establecido por el Consejo de Estado, se obtiene que la acción fue radicada en tiempo,

aspecto que fue considerado en auto de fecha 13 de abril de 2018 (fls. 48 al 52), donde se libró mandamiento ejecutivo de pago, por lo que se hace necesario negar la excepción planteada.

Las anteriores consideraciones, son suficientes para no reponer el auto que antecede y se ordenará que una vez en firme esta providencia ingrese nuevamente el proceso al Despacho para lo correspondiente.

Por lo expuesto, el JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, SECCION SEGUNDA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. DECISIÓN.

PRIMERO: No reponer el auto de 13 de abril de 2018 de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: Se reconoce y se tiene al Doctor ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ, identificado con la C.C. 79.325.927 de Bogotá y T.P. 56.352 del C.S.J., como apoderada judicial de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP, en los términos y para los efectos de la escritura poder visible a folios 52 al 79 del expediente.

TERCERO: En firme este auto, ingrese nuevamente el expediente para lo correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE


ROSSE MAIRE MESA CEPEDA
JUEZ

catc

